

Rumbo al Estado social de derecho:

La necesidad de fortalecer la democracia colombiana

Por Mauricio García Durán, S.J. Director del CINEP

direccion@cinpe.org.co

Los grandes retos que tenemos los colombianos en el esfuerzo por fortalecer nuestra democracia y consolidar positivamente el Estado social de derecho siguen vigentes en el año que terminó. Algunos hechos que visibilizaron dichos desafíos fueron los siguientes: las elecciones regionales y locales de octubre pasado, los interrogantes sobre el proceso de desmovilización paramilitar, el proceso judicial por la parapolítica, las dificultades para avanzar en una negociación de paz con el ELN, los indicadores de la dinámica del conflicto y de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario, las distintas expresiones de movilización social y, finalmente, los avatares en torno a la mediación del presidente Chávez y los hechos en torno a la liberación de Emmanuel, Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, que muestran las dificultades para llegar a un acuerdo humanitario con las FARC.

El primer gran desafío tiene que ver con la exigencia en la vida democrática de un ejercicio de la política sin el recurso a la violencia. En un contexto polarizado por el conflicto armado, lo opuesto se ha convertido en algo "normal" en la dinámica política colombiana. El proceso jurídico en curso a políticos con vínculos con los paramilitares le ha mostrado al país que la magnitud de estas relaciones era mayor que la que se pensaba, vinculando de manera seria a las fuerzas políticas que respaldan al presidente Uribe. Las elecciones de octubre mostraron un resultado ambiguo en esta relación de políticos y actores armados. Por una parte, se pudo constatar tanto el avance de la parapolítica en algunas regiones y departamentos del país como la presión armada de la guerrilla -particularmente las FARC- durante la campaña electoral. Pero por otra parte, se constató también la existencia de un voto de opinión que escapa a las presiones que tanto políticos tradicionales como actores armados ejerce en el ámbito electoral, y esto ofrece alguna esperanza sobre opciones políticas que en el futuro tomen distancia de cualquier posibilidad de "combinar las formas de lucha" ya sea en opciones de izquierda o de derecha.

El monopolio de la fuerza en manos del Estado ha sido una realidad esquiva durante toda nuestra historia republicana.

El segundo reto tiene que ver con la exigencia por consolidar un monopolio legítimo de la fuerza. El monopolio de la fuerza en manos del Estado ha sido una realidad esquiva durante toda nuestra historia republicana. Experiencias en otros contextos nos enseñan que no basta fortaleza y acción militar para alcanzar dicho monopolio derrotando a los alzados en armas; se requiere también una verdadera estrategia de paz que permita avanzar hacia nuevos consensos en torno al Estado social de derecho en el que los actores e intereses sociales enfrentados tengan cabida. Pero

igualmente se necesita que el ejercicio de este monopolio sea legítimo, es decir, de acuerdo a las leyes y al respeto de los derechos humanos. Dicha legitimidad ha sido cuestionada por la constatación de la existencia de casos de “falsos positivos” de parte de la fuerza pública, que suscitan interrogantes sobre los resultados que el gobierno presenta de su política de seguridad democrática.

Por último, la importancia de la movilización social como condición de una vida democrática y de la consolidación del Estado social de derecho: por una parte, la magnitud de la protesta contra la violencia y el conflicto armado dentro de la gama de expresiones de protesta social, es un indicador de la existencia de una demanda por seguridad que no logra resolver la actual estrategia de “seguridad democrática”. Por otra parte, la movilización de las víctimas en este año que pasó ha incidido para que puntos centrales de su agenda (como un acuerdo humanitario para la liberación de los secuestrados) lleguen a ser parte de la agenda presidencial. De ahí se desprende que el reto que tiene la movilización social es encontrar la adecuada vinculación con la dinámica de la comunidad internacional para tener mayor capacidad de incidencia, en una perspectiva verdaderamente democrática, en las políticas públicas de paz y seguridad.

Los artículos de este número de Cien Días nos permiten ahondar en el contenido de estos desafíos y nos invitan a trabajar para que en el 2008 podamos avanzar en la consolidación del Estado social y democrático de derecho.